

Enfrentar el nuevo modelo universitario mercantil y segregador

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y miembro de la sección sindical de CCOO-ULE.



Nuestra Universidad

Pública está siendo acusada por las corrientes neoliberales de ser ineficaz, cara y mediocre, cuando, muy al contrario, los estudios internacionales muestran que nuestra educación superior y productividad científica son

equiparables a los de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país supone unos recursos anuales un 20% inferiores. Y todo ello se consigue en las universidades públicas, que acogen el 90% del estudiantado y son responsables del 97% de la producción científica total del sistema.

Aun así, es evidente que la universidad debe seguir mejorando y evolucionar para atender las nuevas demandas sociales que van apareciendo. La sociedad espera que la universidad sea no sólo una institución académica de calidad, sino también un agente dinamizador para un nuevo modelo social ético, justo, solidario y al servicio de la emancipación, la dignidad humana y la construcción de un mundo más justo y mejor para toda la sociedad.

Estos objetivos sólo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social de universidad, basado en dos principios fundamentales: por una parte, el compromiso social y la responsabilidad científica y ética y por otra, la autonomía universitaria y la independencia académica.

Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad, nos encontramos con las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático que en los últimos años propugnan reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida la docencia que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar be-

neficios para la industria privada.

Para justificar este modelo mercantilista hemos venido asistiendo a una campaña ideológica sistemática, con ingredientes tales como: desprestigio de lo público frente a la exaltación de lo privado; catastrofismo en el balance universitario de las últimas décadas; exageración de las deficiencias actuales; falseamiento de las cifras sobre el tamaño o el coste de nuestras universidades públicas; priorización exclusiva de la vertiente mercantil de la “tercera función”, limitando la transferencia de conocimiento a sólo la parte de la sociedad ligada a los intereses del sector productivo; ataque frontal a la autonomía universitaria pretendiendo que órganos de gobierno no sean elegidos por la comunidad universitaria, sino por autoridades o grupos de poder ajenos a la misma; proliferación de universidades privadas, prácticamente sin ningún control, en un contexto de estancamiento de la demanda de estudiantes y con una oferta de titulaciones ya cubierta por el sector público; etc.

Esta ofensiva contra la universidad pública ha ido subiendo de nivel en los últimos años. Utilizando la crisis económica como excusa, el ataque ha traspasado la barrera de la mercantilización y la descalificación para entrar directamente en el desmantelamiento, mediante medidas de destrucción de nuestro sistema público universitario (aumento de tasas, reducción de financiación, subvenciones y becas, plantillas y personal, etc.).

La última propuesta de reforma universitaria en España es el decreto 3+2 que supondrá costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado costo de los masters. Este decreto tendrá como consecuencia además la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario.

La aprobación del Plan Bolonia supuso el aumento de las tasas y la privatización de la Universidad Pública que se profundiza ahora con la introducción del modelo de 3+2. Con este modelo los Máster serán imprescindibles para desempeñar una profe-

sión de alta cualificación, pero por su alto coste solo podrán ser desempeñados por una minoría privilegiada. Lo que pretende el PP con este Real Decreto es establecer un corte selectivo en la educación superior, quitando así valor a los títulos de grados universitarios, los más accesibles, condenado a la juventud a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Además, esta reducción supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasladando a las familias el coste global de los Máster y beneficiando a las universidades privadas.

En definitiva, estamos ante un paquete de reformas que se convertirán en una “reforma encubierta” del sistema universitario a base de decretos, sin contar con la comunidad educativa, tras el incremento de las tasas que pagan los y las universitarias, y la imposición de tres nuevos Reales Decretos que suponen la modificación no sólo de la ordenación de las enseñanzas universitarias (cambio del 4+1 al 3+2), sino los requisitos para la creación de centros universitarios que facilita abrir nuevas universidades privadas sin las condiciones mínimas y el sistema de acreditación del profesorado universitario, que dejará la docencia en segundo plano y potenciará el nepotismo en la selección de los y las docentes universitarios.

Todas estas reformas responden a unos presupuestos anclados en la ofensiva que en los últimos años pretende "mercantilizar" la universidad mediante tres vías principales:

- La *sumisión académica*, donde la docencia y la investigación deben estar determinadas esencialmente por el mercado laboral y las posibilidades de comercialización y especialización en aquellas competencias que sean útiles y vendibles en dicho mercado.

- La *gobernanza jerárquica*, en lugar de la colegiada y electiva actual, en donde las Universidades públicas deben imitar el modelo de gestión privada del mundo empresarial, que se considera más eficaz y rentable.

- La *financiación mercantilista*, basada en el repago de los estudios por parte del alumnado mediante incremento exponencial de las tasas académicas y el endeudamiento bancario para poder continuar estudiando; la generación de negocio a través de la transferencia de los resultados de la investigación a las empresas para su explotación comercial; la financiación privada y el mecenazgo como alternativa a las aportaciones públicas, en un marco de una competitividad “a la manera del darwinismo

social” entre las Universidades para conseguir esa financiación.

Revertir este modelo no será posible sin cambiar no sólo este enfoque de reformas neoliberales, sino también las políticas de recortes en Educación Superior que viene aplicando el bipartidismo. La sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década. Les han recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los últimos 4 años: en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras, equipamientos e investigación (un 56%). El gasto medio por alumno ha bajado un 16,48 % (25,2 % aplicada la inflación). El único capítulo que aumenta son las tasas que irán a cargo de las familias. Según un estudio del [Observatorio del Sistema Universitario](#) (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Cuando en los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. En los países nórdicos los estudios universitarios son gratuitos; en Austria o Escocia la matrícula es gratuita; la matrícula requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania –aunque recientemente ha establecido la gratuidad- o 183€ en Francia, por ejemplo). Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.



► ¡No al decreto 3+2!
► ¡No a la privatización de la Universidad Pública!

La inversión pública en el sistema universitario español se sitúa a la cola de los países de la UE-15. El Estado español sólo dedica el 1,1% del PIB a la educación universitaria, mientras que países como Estados Unidos alcanzan el 3% de su PIB y la media de la UE-15 sobrepasa el 2%. La sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década.

Por eso es más necesario que nunca apoyar las mo-

vilizaciones contra los decretos y reformas universitarias y educativas que está introduciendo a toda máquina en las postrimerías de su gobierno y animar a toda la comunidad universitaria, movimientos sociales y ciudadanía para movilizarse y exigir la dimisión de este Ministro de Educación y de las políticas del PP que son insostenibles en una sociedad democrática y de derechos. Porque si algo hace insostenible el sistema son las políticas de recorte del PP.

El modelo alternativo de Universidad debe apostar por una Ley de Financiación del Sistema Universitario para garantizar las inversiones y los recursos necesarios igualando la inversión pública universitaria a la media europea; aumentar sustancialmente la financiación de la investigación destinada a las Universidades públicas y generalización de las becas-salario (percepción de una renta para asegurar las posibilidades de estudiar); abrir un debate social con toda la comunidad universitaria y social sobre la Universidad que realmente se necesita; establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado; planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y supresión de pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo; establecer mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, de pública disponibilidad y no un negocio privado; acordar un Estatuto del Personal Docente e Investigador negociado con los sindicatos y un nuevo Estatuto del Estudiante; representación auténticamente democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno; impulsar una metodología docente participativa, en pequeños grupos y seminarios, reduciendo sustancialmente la ratio alumnado-profesorado; Establecer Campus Interuniversitarios integradores basados en la cooperación, no en una competitividad de los Campus de Excelencia.

Mientras el 1% de la humanidad que vive en la opulencia malgasta los últimos recursos naturales, el 99% restante está inmerso en una miseria sin nombre en la que se hunde cada vez más. Nuestra preocupación no debería ser precisamente asegurar mediante la educación superior una 'inserción armoniosa' de nuestros estudiantes en este tipo de sociedad y en su estructura económica y mercantil. Lo que debería preocuparnos es cómo dotar de herramientas a los jóvenes universitarios y cómo organizarnos con ellos y entre el personal docente y de administración de las Universidades para construir alternativas y rebelarse no sólo contra el actual modelo de universidad sino contra el modelo económico y social imperante. Desde la universidad, debemos y podemos desarrollar y armar a la sociedad con los saberes que permiten comprender el mundo para transformarlo y construir un mundo más justo y mejor para toda la humanidad y el planeta. La primera tarea, por lo tanto, es no sólo deconstruir el discurso dominante que hemos analizado, parando simultáneamente unas prácticas atentatorias contra la universidad pública y posibilitando el acceso a la misma de toda la ciudadanía, sino conectar este análisis y esta praxis al sentido común de la comunidad universitaria, ofreciendo alternativas concretas que den esperanza y muestren que otra universidad es posible.

Enrique Javier Díez Gutiérrez.

Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y miembro de la sección sindical de CCOO-ULE

www.feccoocyle.es

La web con más noticias educativas de actualidad

denuncia

reivindica

moviliza

consigue